

PRESENTACIÓN
José Thompson J.

A PROTEÇÃO REFLEXA DO MEIO AMBIENTE NA JURISPRUDÊNCIA
DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

Caroline Dimuro Bender D'Avila
Géssica Adriana Buguiski Becker
Pâmela Dacol de Brito

Sara Margarida Silva de Figueiredo da Conceição

LAS PROTESTAS COMO EXPRESIÓN SOCIAL Y EL DERECHO A CIRCULAR:

EL CASO ARGENTINO
Cristiana Domínguez

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y
EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:

UNA COMPARACIÓN SOBRE EL PUNTO DE VISTA DE LA APLICABILIDAD
DEL PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA NORMA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA

Ana Lucía Gasparoto
Jayme Wanderley Gasparoto
José Blanes Sala

LA EDAD MÍNIMA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN
Y JURISPRUDENCIA DE COSTA RICA A PARTIR DEL CORPUS JURIS INTERNACIONAL
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ

Frank Harbottle Quirós

LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO
Marcos José Miranda Burgos

LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARAGUAYO Y SUS EFECTOS

Romina Paiva Godoy

TRIBUNALES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
EN CASOS DE CRÍMENES INTERNACIONALES.

ESPECIAL REFERENCIA AL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Y A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Yennesit Palacios Valencia

LA "DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL" EN LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Paola Pelletier Quiñones

60

Julio - Diciembre 2014

REVISTA

IIDH

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
INSTITUT INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L'HOMME
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS
INTER-AMERICAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS

60

Julio - Diciembre 2014

REVISTA
IIDH

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Institut Interaméricain des Droits de l'Homme
Instituto Interamericano de Direitos Humanos
Inter-American Institute of Human Rights

© 2014 IIDH. INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Revista
341.481

Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos
Humanos.-Nº1 (Enero/junio 1985)
-San José, C. R.: El Instituto, 1985-
v.; 23 cm.

Semestral

ISSN 1015-5074

1. Derechos humanos-Publicaciones periódicas

Las opiniones expuestas en los trabajos publicados en esta Revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no corresponden necesariamente con las del IIDH o las de sus donantes.

Esta revista no puede ser reproducida en todo o en parte, salvo permiso escrito de los editores.

Corrección de estilo: Marisol Molestina.

Portada, diagramación y artes finales: Marialyna Villafranca

Impresión litográfica: Versailles S.A.

La Revista IIDH acogerá artículos inéditos en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, que hagan énfasis en la temática de los derechos humanos. Los artículos deberán dirigirse a: Editores Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.

Se solicita atender a las normas siguientes:

1. Se entregará un documento en formato digital que debe ser de 45 páginas, tamaño carta, escritos en Times New Roman 12, a espacio y medio.
2. Las citas deberán seguir el siguiente formato: apellidos y nombre del autor o compilador; título de la obra (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada. Para artículos de revistas: apellidos y nombre del autor, título del artículo (entre comillas); nombre de la revista (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada.
3. La bibliografía seguirá las normas citadas y estará ordenada alfabéticamente, según los apellidos de los autores.
4. Un resumen de una página tamaño carta, acompañará a todo trabajo sometido.
5. En una hoja aparte, el autor indicará los datos que permitan su fácil localización (Nº fax, teléf., dirección postal y correo electrónico). Además incluirá un breve resumen de sus datos académicos y profesionales.
6. Se aceptarán para su consideración todos los textos, pero no habrá compromiso para su devolución ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

La Revista IIDH es publicada semestralmente. El precio anual es de US \$40,00. El precio del número suelto es de US\$ 25,00. Estos precios incluyen el costo de envío por correo regular.

Todos los pagos deben de ser hechos en cheques de bancos norteamericanos o giros postales, a nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Residentes en Costa Rica pueden utilizar cheques locales en dólares. Se requiere el pago previo para cualquier envío.

Las instituciones académicas, interesadas en adquirir la Revista IIDH, mediante canje de sus propias publicaciones y aquellas personas o instituciones interesadas en suscribirse a la misma, favor dirigirse al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico: s.especiales2@iidh.ed.cr.

Publicación coordinada por Producción Editorial-Servicios Especiales del IIDH

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Apartado Postal 10.081-1000 San José, Costa Rica

Tel.: (506) 2234-0404 Fax: (506) 2234-0955

e-mail:s.especiales2@iidh.ed.cr

www.iidh.ed.cr

Índice

Presentación	7
---------------------------	----------

José Thompson J.

A proteção reflexa do meio ambiente na Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos	11
--	-----------

*Caroline Dimuro Bender D'Avila, Géssica Adriana Buguiski
Becker, Pâmela Dacol de Brito, Sara Margarida Silva
de Figueiredo da Conceição*

Las protestas como expresión social y el derecho a circular: el caso Argentino.....	39
--	-----------

Cristiana Domínguez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: una comparación sobre el punto de vista de la aplicabilidad del principio de la primacía de la norma más favorable a la persona	53
---	-----------

*Ana Lucía Gasparoto, Jayme Wanderley Gasparoto
y José Blanes Sala*

La edad mínima de la responsabilidad penal. Análisis de la legislación y jurisprudencia de Costa Rica a partir del corpus juris internacional de protección de los derechos humanos de la niñez.....	87
---	-----------

Frank Harbottle Quirós

La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico interno 129

Marcos José Miranda Burgos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico paraguayo y sus efectos . 157

Romina Paiva Godoy

Tribunales internacionales de protección de derechos humanos en casos de crímenes internacionales. Especial referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos humanos 169

Yennesit Palacios Valencia

La “discriminación estructural” en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 205

Paola Pelletier Quiñones

Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) presenta el número 60 de su Revista IIDH, una publicación especial que conmemora el 35 aniversario de la constitución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La Corte IDH es uno de los órganos de nuestro Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, creada con el fin de salvaguardar los derechos de las personas en el continente americano. Una vez creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1959, la Corte IDH se estableció y organizó hasta el momento en que entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por lo que el 22 de mayo de 1979 los Estados parte de la Convención eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a un grupo de juristas, quienes serían los primeros jueces que compondrían el Tribunal. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C.

Así, este año 2014 celebramos el trigésimo quinto aniversario de un Tribunal que, a través de sus competencias, consultiva y contenciosa, ha generado los estándares interamericanos de protección de derechos humanos que hoy, cada vez más, los Estados incorporan en su derecho y práctica nacional.

El aniversario de la Corte IDH también es significativo para el IIDH, toda vez que esta institución fue creada en 1980 en

virtud de un convenio suscrito entre la Corte IDH y la República de Costa Rica, con el fin de constituirse en la entidad académica auxiliar al Sistema Interamericano, dedicada a la investigación, la promoción y la educación en derechos humanos. Es por ello que el IIDH, a través de su revista publicada ininterrumpidamente desde 1985, hace un breve homenaje a la Corte IDH con esta edición especial.

La edición 60 de la Revista IIDH recopila los artículos académicos de Cristiana Domínguez (Argentina); Ana Lúcia Gasparoto, Jayme Wanderley Gasparoto y José Blanes Sala (Brasil); Frank Harbottle Quirós (Costa Rica); Marcos José Miranda Burgos (Ecuador); Romina Paiva Godoy (Paraguay); Yennesit Palacios Valencia (Colombia); Paola Pelletier Quiñones (República Dominicana), y Caroline Dimuro Bender D'Avila, Géssica Adriana Buguiski Becker, Pâmela Dacol de Brito y Sara Margarida Silva de Figueiredo da Conceição (Brasil).

En esta edición especial de la Revista se analiza el caso argentino de protestas bajo la perspectiva del derecho a circular y de expresión social con fundamento, entre otros, en la jurisprudencia y pronunciamiento de la CIDH y la Corte IDH.

Por otra parte, se hace un análisis comparativo entre la Corte IDH y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de determinar si estos tribunales tienen como prioridad la regla que más favorece a la persona (*pro homine* o *pro persona*) en sus pronunciamientos y opiniones.

En materia penal, se analiza en el caso costarricense la edad mínima de la responsabilidad penal a la luz del *corpus juris* internacional e interamericano de protección de los derechos humanos de la niñez.

En cuanto a la ejecución de las sentencias internacionales, se analiza el caso ecuatoriano con el fin de dar un diagnóstico sobre el estado real de la ejecución de sentencias de la Corte IDH en el ordenamiento jurídico interno.

En materia constitucional, se analiza el caso paraguayo para definir la forma en que la CADH se integra en el ordenamiento jurídico paraguayo y los efectos que dicha integración genera en el derecho nacional.

En vínculo con el Derecho Penal Internacional, se analiza la interpretación extensiva que hacen los tribunales internacionales con énfasis en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte IDH, sobre asuntos especialmente juzgados como violaciones graves de derechos humanos, y cómo esto genera un aporte esencial en la construcción y fortalecimiento de la justicia penal internacional.

Por otra parte, se repasa y analiza la jurisprudencia de la Corte IDH con el fin de proponer el establecimiento del concepto de “discriminación estructural” y establecer estándares interamericanos sobre el mismo.

Finalmente, sobre una temática emergente, se examina la protección que ha establecido la Corte IDH al derecho a un medio ambiente sano, a través de una interpretación amplia de los derechos humanos, apoyándose en la tesis de la indivisibilidad, interrelación e interdependencia de los derechos humanos.

Desde el IIDH esperamos que esta publicación les acerque a conocer la jurisprudencia de la Corte IDH y sus efectos en la justicia interamericana. Además, aprovecho esta presentación para agradecer en nombre del IIDH a las autoras y autores que han hecho llegar al IIDH sus artículos académicos para esta edición de la Revista y cuya colaboración en este homenaje ha

vido esencial para reflexionar sobre la incidencia de la Corte IDH en la protección de los derechos humanos, no sólo en el ámbito internacional, sino en el nacional.

*José Thompson J.
Director Ejecutivo, IIDH*

A proteção reflexa do meio ambiente na Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos

*Caroline Dimuro Bender D'Avila**

*Géssica Adriana Buguiski Becker***

*Pâmela Dacol de Brito****

*Sara Margarida Silva de Figueiredo da Conceição*****

1. Considerações Iniciais

A crescente preocupação com os direitos humanos e o seu reconhecimento pelos Estados no âmbito internacional¹

* Mestre pelo programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora do Curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório (Av. Jorge Dariva, N° 1042, Bairro Centro, Osório/RS – Brasil – CEP 95520-000. Telefone: (51) 2161.0200 - 2161.0239). Correio eletrônico: carolinebdavila@gmail.com

** Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório. Bolsista do Programa Interno de Fomento à Pesquisa da Faculdade Cenecista de Osório/FACOS. Correio eletrônico: buguiski@hotmail.com

*** Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório. Correio eletrônico: pameladacol@hotmail.com

**** Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório. Bolsista do Programa Interno de Fomento à Pesquisa da Faculdade Cenecista de Osório/FACOS Correio eletrônico: saramfig@hotmail.com

1 A preocupação dos Estados com a proteção dos direitos humanos surge com maior força após o término da Segunda Guerra Mundial, sendo possível identificar essa afirmação através da leitura do preâmbulo da Carta das Nações Unidas que na sua primeira parte diz “**NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS,**

impulsionaram a promulgação de diversos tratados protecionistas desses direitos.². Estes documentos são resultados de esforços conjuntos entre nações, que, através de mútuo acordo, compunham sistemas de proteção aos direitos humanos, sejam eles de caráter global ou regional.

Com abrangência global, a Organização das Nações Unidas (ONU) é reconhecidamente o maior símbolo institucional de proteção aos direitos humanos, pois seus princípios são aplicados aos Estados de qualquer parte do globo, independentemente do espaço geográfico ao qual pertencem, bastando que os mesmos expressem suas vontades de submeterem-se à competência da Organização.³ Por outro lado, existem os sistemas regionais de direitos humanos, que tratam de problemas específicos de cada região e atuam, principalmente, em três continentes: Europa, América e África, onde se situam, respectivamente, o Conselho

RESOLVIDOS a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.” (**CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS**. Disponível em: http://csnu.itamaraty.gov.br/images/Carta_da_ONU_-_Vers%C3%A3o_Portugu%C3%AAs.pdf. Acesso em: 04 abr. 2014.

- 2 A exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, e da Declaração dos Direitos e Deveres do Homem da OEA, de 1948. Para mais informações sobre os documentos oficiais de protetivos, ver COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2010.
- 3 O tratado constitutivo da ONU (Cartas das Nações Unidas, de 1945) foi firmado inicialmente por 51 Estados-membros. Ao longo dos anos, por ser de caráter aberto e aceitar como membro – por decisão da Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança – todas as nações amantes da paz, a ONU passou a incorporar inúmeros outros países, possuindo hoje 193 Estados membros.

da Europa (CE), a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a União Africana (UA).

Neste artigo cuidaremos do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH), o qual é formado pelas seguintes instituições: Organização dos Estados Americanos (OEA), Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e tem como seus principais diplomas normativos: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose) e seus dois protocolos adicionais – Protocolo Relativo aos Direitos Sociais e Econômicos (Protocolo de San Salvador) e Protocolo referente à Abolição da Pena de Morte.

No que tange às normas internacionais de direitos humanos previstas no âmbito do SIDH, estas estabelecem obrigações para os Estados que se comprometem com o seu cumprimento, no sentido de promoção e proteção dos direitos consagrados internacionalmente. Assim sendo, a violação das normas reconhecidas nestes instrumentos poderá acarretar responsabilização e sanção para o Estado infrator, a ser apurada pela Corte Interamericana.

Dentre os direitos humanos reconhecidos nos documentos internacionais referidos, o direito ao meio ambiente sadio se encontra positivado em diversas ocasiões. Verifica-se, contudo, que as normas protetivas do meio ambiente são juridicamente frágeis, isto é, obrigatórias, mas não exigíveis diretamente pela via judicial. Assim, impõe-se examinar de que forma a proteção ambiental tem sido efetivada em âmbito internacional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para tanto, buscamos analisar a jurisprudência do órgão jurisdicional do SIDH no

que se refere à proteção reflexa do meio ambiente, ou seja, à sua concretização a partir de uma interpretação extensiva dos direitos humanos e dos seus mecanismos protetivos.

2. O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos

O continente americano possui uma longa história na atuação da defesa dos direitos humanos de sua população. Em sintonia com o sistema global de proteção, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos aplica as normas protecionistas de direitos humanos internacionalmente reconhecidas e, indubitavelmente, fundamentais. Analisaremos quais são os órgãos que compõe o SIDH, bem como a base normativa que disciplina o funcionamento deste sistema.

2.1. A Organização dos Estados Americanos: Instituição e Sistema Normativo

O tratado institutivo da Organização dos Estados Americanos, conhecido como Carta da OEA ou Carta de Bogotá, foi assinado em Bogotá, Colômbia, no ano de 1948, embora sua origem remonte o século XIX, sendo a mais antiga organização regional dentre as três existentes.⁴ No artigo 1º da Carta está estabelecido

4 Segundo MAZZUOLI, o então presidente dos Estados Unidos da América, James Monroe, teria enviado ao congresso norte-americano, em 02 de dezembro de 1823, uma carta manifestando a impossibilidade de colonização dos Estados latino-americanos, que tinham sido libertados por seus colonizadores. Com base nesta carta, Simon Bolívar deu iniciativa à organização de um Congresso na cidade do Panamá, em 1926, *destinado a aprovar um projeto de tratado constitutivo de uma confederação de todos os Estados do novo mundo, objetivando manter a paz e a segurança de todos os seus membros, tendo esse movimento recebido o nome*

que a organização referida constitui um organismo regional e sua competência está limitada estritamente às regras estabelecidas pelo próprio documento instituidor, não podendo intervir nos assuntos de competência interna de cada Estado membro. Desta forma, os Estados abrangidos pelo Sistema Interamericano, embora pertençam a um mesmo espaço geográfico, não estão obrigados a submeterem-se às normas instituídas pela Carta de Bogotá, sendo uma opção de cada membro, embora com repercussões cada vez mais importantes no atual direito internacional.

A existência da organização regional justifica-se pela necessidade de colaboração entre os Estados para o desenvolvimento pacífico da região à qual pertencem. Assim, no que diz respeito aos propósitos da Organização dos Estados Americanos, podemos identificá-los a partir do artigo 2º da Carta, sendo possível afirmar a existência de maior preocupação quanto aos problemas econômicos, sociais e culturais.⁵

Originalmente, a OEA contou com a participação de 21 Estados fundadores e, mais tarde, novos Estados ratificaram a Carta, contando hoje com 35 membros.⁶ Destarte, os Estados

de pan-americanismo. A partir daí, então, que se desenvolveu a ideia da criação da Organização dos Estados Americanos, que evolui através de Conferências Internacionais dos Países Americanos, culminando na assinatura do tratado instituidor da OEA, em 1948. (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 651).

5 Segundo ACCIOLY, SILVA e CASELLA, “A grande preocupação dos países da América Latina é a melhoria das condições de vida de seus habitantes. Em outras palavras, sem querer ignorar a importância dos direitos civis e políticos, para eles os problemas econômicos, sociais e culturais são prioritários”. (ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G.E. do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 479.)

6 Dados retirados do sítio oficial da Organização dos Estados Americanos. Disponível em: http://www.oas.org/pt/estados_membros/default.asp. Acesso em: 03 abr. 2014.

que ratificaram a Carta de Bogotá, reconhecendo assim a competência da OEA e aceitando a submissão às suas normas instituidoras, passaram a fazer parte de um sistema integrado de proteção aos direitos das mais diversas naturezas, sempre com o objetivo de preservar o ser humano e o desenvolvimento saudável da região abrangida pelo sistema.

Portanto, com a união dos Estados, através da OEA, o desenvolvimento, aprimoramento e firmação dos direitos humanos tornaram-se viáveis com ações positivas no sentido de proteger as relações entre os Estados e também os direitos dos indivíduos submetidos à jurisdição dos Estados membros. E, como exemplo dessas ações positivas, apresenta-se a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na IX Conferência Internacional Americana, na cidade de Bogotá, em abril de 1948, isto é, na mesma oportunidade em que foi instituída a OEA.

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem precedeu alguns meses à Declaração Universal dos Direitos Humanos,⁷ e proclama, além de direitos humanos, também os deveres. Trata-se, portanto, do primeiro documento a dar início ao processo de generalização dos direitos humanos, transcendendo “as distintas formulações de direitos reconhecidos em diferentes instrumentos”.⁸

7 A Declaração dos Direitos e Deveres do Homem data de abril de 1948, sendo que a Declaração Universal é de dezembro do mesmo ano.

8 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. **O Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Limiar do Novo Século: Recomendações para o Fortalecimento de seu Mecanismo de Proteção**. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/interamericano/14osistema.htm>. Acesso em: 04 abr. 2014

2.2. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos

O artigo 106 da Carta da OEA previu a criação de uma Comissão cujo “principal objetivo seria promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização em tal matéria”, tendo esta previsão sido concretizada em 1959, pela resolução VIII, na quinta reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores. Destarte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) “é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano”.⁹

Frise-se que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem como principal documento normativo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San Jose, aprovada em 1969,¹⁰ que traz um rol de direitos sociais, culturais e econômicos. Mais tarde, em 1988, o Pacto de San Jose foi complementado pelo Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,¹¹ o qual trouxe com maiores especificidades os direitos anteriormente consagrados. Em 1990,

9 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **O que é a CIDH?** Disponível em: <http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp>. Acesso em 04 abr. :adragésimo aa p d Proteção do do en todo el artta Corte Interamericana. 2014.

10 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Convenção Americana sobre Direitos Humanos.** Disponível em: [http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_ americana.htm](http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm). Acesso em: 19 abr. 2014.

11 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de San Salvador”** Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm. Acesso em: 19 abr. 2014.

no Vigésimo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, foi aprovado o Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte. Portanto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no exercício de sua competência, observa, além das normas estabelecidas pela Declaração de 1948, também o rol de direitos presentes nos seus dois protocolos adicionais.

O capítulo VII da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é dedicado à Comissão, sendo que ali se encontra prevista toda a sua estrutura administrativa e de competência. Para nós, cabe demonstrar que é a Comissão a responsável pelo recebimento das petições que contenham denúncias ou queixas de violação das normas estabelecidas pelo Pacto de San Jose por um Estado Parte, bem como a análise do cumprimento dos requisitos para encaminhamento das petições à Corte Interamericana de Direitos Humanos.¹²

2.3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos

Como órgão consultivo e jurisdicional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Corte Interamericana foi prevista pela Convenção de 1948. Por força do artigo 33, teve atribuída a competência para “conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados Partes”.

Os Estados membros signatários da Convenção Americana são os únicos que podem ser submetidos à jurisdição da

12 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**, Seção 2 – Funções, art. 41 a 43. Seção 3 – competência, 44 a 47. Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_america.htm. Acesso em: 19 abr. 2014.

Corte. Entretanto, assim como não são obrigados a ratificar a Convenção, uma vez aderindo ao seu conteúdo, ainda não estão obrigados à submissão jurisdicional, sendo necessária declaração expressa de aceitação da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A função consultiva da Corte relaciona-se com a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como os demais tratados referentes à matéria. Assim, os Estados Partes podem solicitar pareceres da Corte, inclusive no que concerne à validade de uma lei interna em relação às normas internacionais de direitos humanos.¹³

Quanto à função jurisdicional, cabe à Corte decidir sobre as violações aos direitos humanos praticadas ou não pelos Estados Partes, aplicando as normas de direito internacional cabíveis em cada caso concreto e velando pela preservação, reparação ou indenização dos direitos humanos, de acordo com o artigo 63 da Convenção Americana.¹⁴ Atualmente, 286 casos já foram

13 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo 64 interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 2. A Corte, a pedido de um Estado membro da Organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais.

14 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo 63 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.

julgados pela Corte,¹⁵ sendo 22 o número de Estados¹⁶ que reconhecem a sua competência jurisdicional.

3. Normas Ambientais no Sistema Interamericano de Direitos Humanos

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos abriga a importância do ambiente de uma forma que ultrapassa o simples reconhecimento de mais um direito humano.¹⁷ Destarte, a Carta Democrática Interamericana reconhece um meio ambiente saudável e equilibrado como elemento indispensável para o desenvolvimento completo do ser humano, o que colabora para a estabilidade política e para efetivação da democracia. Observe-se o artigo 15 da Carta, *in verbis*:

O exercício da democracia facilita a preservação e o manejo adequado do meio ambiente. É essencial que os Estados do Hemisfério implementem políticas e estratégias de proteção do meio ambiente, respeitando os diversos tratados e convenções, para alcançar um

15 Julgados disponíveis em: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/decisions-and-judgments>. Acesso em: 08 abr. 2014.

16 Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Republica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratifif.htm. Acesso em: 08 abr. 2014.

17 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do sistema interamericano de direitos humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO AMBIENTE. **Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos**. Bogotá, 2010, p. 49.

desenvolvimento sustentável em benefício das futuras gerações.¹⁸

Nesse ponto, é significativo ressaltar que o continente americano foi um precursor mundial no reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio de maneira expressa e vinculante. No Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1988, também conhecido como Protocolo de San Salvador, encontra-se a exposição de tal direito, no artigo 11, o qual trata do direito a um meio ambiente sadio e preceitua que “toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com os serviços públicos básicos” e que “os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento o meio ambiente”.¹⁹

Embora tenha ocorrido o reconhecimento desse direito, cabe salientar que o Protocolo não reconhece a possibilidade de sua exigência direta mediante a apresentação de petições individuais. Apenas os direitos estabelecidos na alínea “a” do artigo 8 (direitos sindicais) e no artigo 13 (direito à educação) podem ser pleiteados através de petições individuais. Os demais direitos presentes no Protocolo, incluindo-se aqui o direito a um meio ambiente sadio, podem ser exigidos somente caso haja vinculação a outros direitos reconhecidos na Convenção Americana ou nas convenções e protocolos que a detalham.

18 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Carta Democrática Interamericana**. Disponível em: http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/DemoCratic_Charter.htm. Acesso em: 19 abr. 2014.

19 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de San Salvador”** Disponível em: http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm. Acesso em: 19 abr. 2014.

Conforme já exposto, a estrutura de proteção ofertada pelo Protocolo de San Salvador define o direito a um ambiente sadio como um direito coletivo, estando, dessa forma, incluído dentre os direitos econômicos, sociais e culturais. Neste contexto, há que se ter em mente que o Protocolo de San Salvador foi criado para preencher as lacunas deixadas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a qual apresentou apenas um dispositivo relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – artigo 26,²⁰ não ficando expreso quais seriam os direitos protegidos. Portanto, o objetivo do Protocolo consiste em sanar os questionamentos deixados pela Convenção nesse sentido.

No âmbito da doutrina constitucionalista, a corrente que parece estar mais afinada com a normativa prevista no Protocolo é aquela que considera os direitos econômicos, sociais e culturais como “direitos programáticos”. Assim classificados, apenas estabelecem fins públicos que devem ser alcançados pelo Estado, mas não possuem normatividade suficiente para produzir seus efeitos essenciais sem a formulação de políticas públicas e programas governamentais para que obtenham plena operatividade. Consequentemente, não são passíveis de controle jurisdicional, já que consistem em objetivos e metas a serem realizados progressivamente pelo Estado, conforme sua discricionariedade político-administrativa e sua disponibilidade orçamentária.²¹

20 Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.

21 Existe divergência doutrinária em relação à possibilidade de concretização dos direitos fundamentais sociais pela via judicial, embora seja majoritário o

Em razão dessa posição teórica, a jurisprudência originada dos casos em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu sobre temas relacionados a esses direitos, tem repetidamente se voltado para a violação de direitos individuais e não para infração daqueles. Essa prática acarreta em uma generalização da defesa dos direitos coletivos mediante o uso de uma “porta dos fundos” jurídica e não por meio de um controle jurisdicional direto.²² Esse fenômeno está sendo referido por alguns autores como “*greening international law*”.²³

Contudo, apresenta-se como alternativa à situação descrita anteriormente, a teoria da inter-relação dos direitos humanos com o ambiente, adotando-se a tendência global no sentido do reconhecimento da universalidade e da indivisibilidade dos

entendimento, entre os constitucionalistas brasileiros, de que os direitos sociais são autênticos direitos fundamentais, sujeitos, portanto, à observância do artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, que determina a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais**: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 299. Em sentido contrário, Torres sustenta que os direitos sociais não devem ser confundidos com os fundamentais. Para o autor, “os direitos sociais máximos devem ser obtidos na via do exercício da cidadania reivindicatória e da prática orçamentária, a partir do processo democrático. Esse é o caminho que leva à superação da tese do primado dos direitos sociais prestacionais (ou direitos a prestações positivas do Estado, ou direitos de crédito – *droit créance* – ou *Teilhabrechte*) sobre os direitos da liberdade, que inviabilizou o Estado Social de Direito, e ao desfazimento da confusão entre direitos fundamentais e direitos sociais, que não permite a eficácia destes últimos sequer na sua dimensão mínima. TORRES, Ricardo Lobo. **O Direito ao Mínimo Existencial**. Rio de Janeiro, Renovar, 2009. p. 41.

22 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO AMBIENTE. **Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos**. Bogotá, 2010, p. 50.

23 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; TEIXEIRA, Gustavo DE FARIA MOREIRA. “*Greening*” the Inter-American Human Rights System. *L’Observateur des Nations Unies*, 2012-2, vol. 33. p. 300-313.

direitos humanos. Nota-se que algumas iniciativas regionais de promoção de defesa do meio ambiente já demonstram essa tendência.²⁴

Como exemplo, podemos citar as Resoluções n. 1819, “Direitos Humanos e Ambiente”,²⁵ n. 1896, “Direitos Humanos e o Ambiente nas Américas”,²⁶ e n. 1926 “Os Direitos Humanos e o Meio Ambiente nas Américas”,²⁷ todas aprovadas pela Assembleia Geral da OEA.

A Resolução n. 1819 (XXXI-O/01) prevê que o efetivo gozo de todos os direitos humanos tem o condão de facilitar uma proteção do meio ambiente mais eficiente, por meio da criação de condições para alterar os padrões de conduta que ocasionam a alteração do ambiente.²⁸ Além disso, através desse documento, a Assembleia Geral do OEA resolveu:

1. Ressaltar a importância de estudar o possível vínculo existente entre o meio ambiente e os direitos humanos,

24 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO AMBIENTE. **Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos**. Bogotá, 2010, p. 50.

25 Resolução n. 1819, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1819 (XXXI-O/01) - (5 de junho de 2001). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_01/AG01788P06.doc. Acesso em: 15 maio 2014.

26 Resolução n. 1896, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1896 (XXXII-O/02) - (4 de junho de 2002). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_02/AG02041P08.DOC. Acesso em: 15 maio 2014.

27 Resolução n. 1926, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1926 (XXXIII-O/03) - (10 de junho de 2003). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_03/AG02290P14.DOC. Acesso em: 15 maio 2014.

28 Resolução n. 1819, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1819 (XXXI-O/01) - (5 de junho de 2001). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_01/AG01788P06.doc. Acesso em: 15 maio 2014.

reconhecendo a necessidade de promover a proteção do meio ambiente e o pleno gozo de todos os direitos humanos.

2. Encarregar a Secretaria-Geral de elaborar um estudo, em colaboração com outros órgãos do Sistema Interamericano, sobre a possível relação entre a proteção ambiental e o pleno gozo dos direitos humanos.

3. Encarregar o Secretário-Geral de apresentar ao Trigésimo Segundo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral um relatório sobre o cumprimento desta resolução.²⁹

A importância da relação existente entre o meio ambiente e os direitos humanos foi lembrada pela Resolução n. 1896 (XXXII-O/02).³⁰ Nesse sentido, a Assembleia decidiu:

1. Continuar acompanhando o tema de direitos humanos e meio ambiente, dispensando atenção especial ao trabalho que os foros multilaterais relevantes desenvolvem sobre ele.

2. Promover a colaboração institucional em matéria de direitos humanos e meio ambiente no âmbito da Organização, especialmente entre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Unidade de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente.³¹

Por sua vez, a Resolução n. 1926 (XXXIII-O/03) reconhece “uma crescente conscientização da necessidade de manejar o

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Resolução n. 1896, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1896 (XXXII-O/02) - (4 de junho de 2002). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_02/AG02041P08.DOC. Acesso em: 15 maio 2014.

³¹ *Ibid.*

meio ambiente de maneira sustentável a fim de promover a dignidade e o bem-estar humanos”. Dentre os compromissos ajustados no documento em questão, ressalta-se a promoção da cooperação institucional no campo dos direitos humanos e do meio ambiente entre a Organização dos Estados Americanos e outras instituições multilaterais; e o estabelecimento de diálogo com os Estados membros da OEA e organizações da sociedade civil, para a execução de atividades no campo do meio ambiente e dos direitos humanos.³²

Atualmente, existe um grande debate no âmbito da OEA relativo à preparação de um projeto de Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, que apresentará ramificações para a proteção do ambiente.³³ No mais recente Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, ocorrido de 04 a 06 de junho de 2013, por meio da Resolução n. 2793 (XLIII-O/13), expressou-se mais uma vez a importância e necessidade de elaboração da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

32 Resolução n. 1926, da Assembleia Geral da OEA, AG/RESOLUÇÃO 1926 (XXXIII-O/03) - (10 de junho de 2003). Disponível em: http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_03/AG02290P14.DOC. Acesso em: 15 maio 2014.

33 Desde 1989, o assunto concernente à necessidade de elaboração de uma Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas vem sendo amplamente exibido no âmbito das discussões da Assembleia Geral da OEA. As resoluções AG/RES. 1022 (XIX-O/89), AG/RES. 1479 (XXVII-O/97), AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1610 (XXIX-O/99), AG/RES. 1708 (XXX-O/00), AG/RES. 1780 (XXXI-O/01), AG/RES. 1851 (XXXII-O/02), AG/RES. 1919 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2029 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2073 (XXXV-O/05), AG/RES. 2234 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2294 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2368 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2498 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2565 (XL-O/10), AG/RES. 2674 (XLI-O/11) e AG/RES. 2724 (XLII-O/12), tratam da matéria, ressaltando a importância e prioridade do tema indígena.

As discussões sobre o assunto abarcam a necessidade do estabelecimento do direito a um ambiente sadio em virtude da presença de instalações altamente poluentes que promovem, muitas vezes, a extração indiscriminada de recursos naturais, colocando em risco o direito de desenvolvimento autônomo das populações indígenas, além de constituírem elemento prejudicial à vida e à saúde dos índios. Ressalta-se que, em diversas situações, essas populações não têm as mesmas garantias que outros indivíduos possuem para invocar seus direitos, mostrando-se, portanto, imperioso o estabelecimento de uma Declaração específica para firmar os direitos desses indivíduos.³⁴

O Projeto de Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas aprovado em 26 de fevereiro de 1997, reconhece as populações indígenas como um grupo com o grande interesse no uso consciente dos recursos naturais e na preservação do meio ambiente como um todo.³⁵ Além disso, com relação ao direito à proteção ambiental, o projeto preceitua o seguinte:

1. Os povos indígenas têm direito a um meio ambiente seguro e sadio, condição essencial para o gozo do direito à vida e ao bem-estar coletivo.
2. Os povos indígenas têm direito a ser informados sobre medidas que possam afetar o meio ambiente, inclusive recebendo informações que assegurem sua efetiva participação em ações e decisões de política capazes de afetá-lo.

34 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO AMBIENTE. **Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos**. Bogotá, 2010, p. 52.

35 *Ibid.*

3. Os povos indígenas têm o direito de conservar, restaurar e proteger seu meio ambiente e a capacidade de produção de suas terras, territórios e recursos.

4. Os povos indígenas têm direito a participar plenamente da formulação, planejamento, ordenação e execução de programas governamentais de conservação de suas terras, territórios e recursos.

5. Os povos indígenas terão direito a assistência de seus Estados com a finalidade de proteger o meio ambiente e poderão solicitar a assistência de organizações internacionais.

6. Os Estados proibirão e punirão e, em conjunto com as autoridades indígenas, impedirão a introdução, abandono ou depósito de materiais ou resíduos radioativos, substâncias e resíduos tóxicos que contrariem disposições legais vigentes; bem como a produção, introdução, trânsito, posse ou uso de armas químicas biológicas ou nucleares em áreas indígenas.

7. Quando o Estado declarar que um território indígena deve ser área protegida, as terras e territórios estiverem sob reivindicação potencial ou real por parte de povos indígenas e as terras forem sujeitas a condições de reserva de vida natural, as áreas de conservação não devem ser objeto de forma alguma de desenvolvimento de recursos naturais sem o conhecimento fundamentado e a participação dos povos interessados.³⁶

36 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Projeto de Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas**. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/Projeto%20de%20Declaracao.htm> Acesso em: 19 maio 2014.

Além dos documentos que visam à proteção do meio ambiente, elaborados sob a égide da OEA, o Sistema Interamericano pode utilizar, ainda, os instrumentos internacionais da ONU, não para declarar violações diretas aos artigos e direitos neles consagrados, mas, sim como um suporte para aperfeiçoamento da jurisprudência; para criar doutrina, expandir e ampliar os direitos humanos consagrados na Convenção; e para fortalecer a estrutura de avaliação dos seus julgamentos ou relatórios particulares.³⁷

4. Atuação da CIDH: Protegendo o Meio Ambiente por Via Oblíqua

Do total de 286 casos contenciosos apreciados pela Corte, quatro tratam da proteção ambiental pela via reflexa. A seguir, portanto, observa-se a situação em concreto e a decisão tomada pela Corte quanto à proteção ambiental por via reflexa.

4.1. Caso das Comunidades afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs. Colômbia

No caso das Comunidades afrodescendentes deslocadas da Bacia do Rio Cacarica (Operação Gênesis) Vs. Colômbia, sentenciado em 2013, a Corte trata da responsabilidade do Estado pela ocorrência de diversas violações de direitos humanos relacionadas à “Operação Gênesis”, que consistiu em uma operação militar com o objetivo de neutralizar ações criminosas das FARC. A operação teria ocasionado o deslocamento

37 RESCIA, Victor Rodrigues. Proteção do direito a um ambiente sadio na jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. In: ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA A DEFESA DO AMBIENTE. **Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos**. Bogotá, 2010, p. 53.

forçado de centenas de pessoas, incluindo-se membros das comunidades afrodescendentes que habitavam nas margens do rio Cacarica. Alegou-se, entre outras violações de direitos humanos, o desrespeito ao direito de circulação e residência, em razão dos deslocamentos; e ao direito de propriedade coletiva das comunidades referidas sobre os territórios que têm possuído ancestralmente, em decorrência da exploração ilegal de recursos naturais realizadas por empresas com a tolerância do Estado.

Com relação à exploração ilegal de recursos naturais, a Corte entendeu que as atividades ocorreram de forma ilegítima, sendo que as autoridades locais, tendo conhecimento dos acontecimentos, não tomaram nenhuma providência a fim de solucionar a questão. Dessa forma, a Corte considerou o Estado responsável pela violação do direito de propriedade coletiva, disposto no artigo 21 da Convenção Americana.

Entre as medidas de reparação dos prejuízos causados aos membros das comunidades em questão, a Corte determinou que o Estado deveria restituir o efetivo uso, gozo e posse dos territórios às comunidades afrodescendentes da bacia do rio Cacarica. Determinou, ainda, que o Estado deveria garantir que as condições dos territórios onde essas comunidades vivem atualmente sejam adequadas para habitação segura e vida digna.

4.2 Caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Equador

O Caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku contra o Equador, sentenciado em junho de 2012, refere-se a uma permissão concedida pelo Estado a uma empresa petrolífera privada para que fossem realizadas atividades como exploração e exportação de petróleo no território deste povo, sem seu

consentimento. As atividades eram realizadas, principalmente com o uso de explosivos em diversos pontos do território indígena, o que botou a vida da população em risco, além de limitar alguns de seus direitos, como o direito de circular por seu território e expressar sua cultura.

A Comissão solicitou à Corte que responsabilizasse o Estado pela violação dos seguintes direitos: direito à propriedade privada; direito à vida, às garantias judiciais e à proteção judicial; direito à circulação e à residência, e; direito à integridade. Assim, foi solicitado também ao Estado que fossem tomadas as medidas necessárias para que houvesse a reparação dos direitos violados.

Além dos direitos já referidos, os representantes do povo indígena afirmaram que os seguintes direitos também foram violados: o direito à cultura e o direito à liberdade da pessoa humana. Solicitando assim, à Corte, que ordenasse ao Estado não somente as medidas de reparação, como também o pagamento de seus prejuízos.

Em abril de 2012, parte da Corte, acompanhada por parte da Comissão, dos representantes e do Estado, realizaram uma visita ao território do Povo Sarayaku, onde lá, reconheceu o Estado como responsável. Após a visita, o Estado reconheceu sua responsabilidade e se mostrou disposto a realizar as devidas medidas de reparação, como: medidas de restituição (extração dos explosivos e reflorestamento das áreas afetadas), de satisfação (ato público de reconhecimento internacional), garantias de não repetição do ocorrido (passou a ser exigida a consulta prévia obrigatoriamente), e indenizações por danos materiais e imateriais. A Corte declarou, então, o Estado como responsável por todos os direitos violados, impedindo o prosseguimento das atividades prejudiciais às pessoas e a seu território.

4.3. Caso do Povo Saramaka Vs. Suriname

No caso do Povo Saramaka Vs. Suriname, sentenciado em 2007, a Corte trata das violações praticadas pelo Estado contra os membros do povo Saramaka, contrariando os artigos 3 (Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 21 (Direito à propriedade) e 25 (Direito à proteção judicial) da Convenção Americana. Por ser uma comunidade tribal que tem profunda ligação com o seu território, o povo Saramaka mereceu medidas especiais de proteção por parte do Estado que garantam a sua sobrevivência física e cultural, entre elas o direito ao gozo de sua propriedade em conformidade com sua tradição comunitária. Porém, de acordo com o marco constitucional e legal do Suriname, os membros do povo Saramaka não têm direito à propriedade *per se*, tem apenas uma permissão para usar e ocupar o território, já que os direitos de propriedade e os recursos naturais pertencem ao Estado.

A Corte entende que o direito à propriedade não é absoluto, desse modo, não é possível impedir que o Estado emita qualquer tipo de concessão para a exploração ou extração de recursos naturais dentro do território Saramaka. No entanto, a restrição ao direito de propriedade por parte do Estado não pode implicar uma denegação da subsistência do povo. Uma possível restrição promovida pelo Estado, além de estar previamente prevista em lei, ser necessária, proporcional e ter a finalidade de alcançar um objetivo legítimo em uma sociedade democrática, deve garantir: participação efetiva do povo, benefícios advindos de atividade dentro do seu território, e realização de um estudo prévio de impacto social e ambiental. Acontece que entre os anos de 1997 e 2004, o Estado emitiu ao menos quatro concessões de madeiras e uma série de concessões de mineração na terra ocupada tradicionalmente pelos Saramakas sem respeitar tais requisitos. Além disso, algumas dessas concessões afetaram os

recursos naturais indispensáveis para a subsistência econômica e cultural do povo, em razão dos danos massivos produzidos nos bosques e da inutilização de parte da terra. Por esses motivos, a Corte considerou que as concessões danificaram o meio ambiente e configuraram violação do direito de propriedade do povo Saramaka, com base no artigo 21 da Convenção.

Entre as medidas de reparação dos prejuízos causados aos Saramakas, a Corte determinou ao Estado: a revisão das concessões com o objetivo de se adequarem às necessidades do povo; a delimitação e demarcação do território, além da outorga de título coletivo; o reconhecimento legal da capacidade jurídica coletiva da comunidade e o acesso à justiça, de modo a garantir plenamente o exercício do direito à propriedade; a adoção de medidas legislativas e administrativas para proteger e garantir o direito à propriedade, o qual inclui as terras e os recursos naturais; e a realização de estudos de impacto ambiental e social antes da emissão de concessões dentro do território tradicional dos Saramakas. A título de indenização pelos danos materiais provocados pelas madeiras, a Corte fixou a quantia de 75 mil dólares. No que tange aos danos imateriais decorrentes da atividade, que consistem no sentimento de sofrimento e angústia pelos quais a comunidade passou ao vivenciar a destruição das suas terras e o desrespeito em relação aos seus valores culturais e espirituais, a Corte condenou o Estado ao pagamento de 600 mil dólares. Ambas as quantias devem ser depositadas em um fundo de desenvolvimento comunitário criado em benefício do povo Saramaka. Nesse caso, preservou-se, simultaneamente, a tradição e a cultura de um povo e o meio ambiente contra ingerências estatais arbitrárias.

4.4. Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua

No caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni *Vs.* Nicarágua, sentenciado em 2001, a demanda submetida, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à Corte, trata de abusos praticados pelo Estado da Nicarágua contra os membros da comunidade indígena Mayagna Awas Tingni. Foi suscitada violação dos artigos 1 (Obrigação de respeitar os direitos), 2 (Dever de adotar disposições de direito interno), 21 (Direito à propriedade privada) e 25 (Proteção judicial) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Alegou-se que a Nicarágua não demarcou as terras da comunidade Awas Tingni, tampouco tomou medidas eficazes para garantir os seus direitos de propriedade em suas terras ancestrais, e ainda, prejudicou os recursos naturais utilizados pelo povo em questão, uma vez que outorgou uma concessão de exploração florestal sem o seu consentimento. Ademais, o Estado não garantiu meios eficientes para solucionar as reclamações propostas pela comunidade sobre seus direitos de propriedade.

No tocante à violação do artigo 25 da Convenção, o qual trata da proteção judicial, a Corte entendeu que o Estado da Nicarágua não respeitou o princípio da razoabilidade do prazo, consagrado na Convenção Americana, durante o curso dos processos judiciais interpostos pela Comunidade Awas Tingni, em diversas instâncias. Além disso, conforme o entendimento da Corte, os recursos de amparo propostos pela comunidade foram ineficazes, pois houve um atraso injustificado em seu processamento. Sendo assim, a Corte concluiu que o Estado violou o artigo mencionado, em prejuízo dos membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni, em conexão com os artigos 1.1 (Obrigação de respeitar os direitos) e 2 (Dever de adotar disposições de direito interno) do mesmo documento.

Quanto à violação do artigo 21 da Convenção Americana, que dispõe sobre o direito à propriedade privada, a Corte considerou evidente a existência de uma normativa que reconhece e protege a propriedade indígena na Nicarágua. Contudo, entendeu que na Nicarágua não existe um procedimento efetivo para delimitar, demarcar e titular as terras das comunidades indígenas. Dessa forma, entendeu que o Estado violou o direito ao uso e gozo dos bens dos membros da Comunidade Mayagna Awas Tingni, pelo fato de não ter delimitado e demarcado sua propriedade, e por ter outorgado concessões a terceiros para a exploração de bens e recursos localizados em uma área que pode corresponder, total ou parcialmente, aos terrenos sobre quais deveria recair a delimitação, demarcação e titulação correspondentes. Portanto, a Corte concluiu que a Nicarágua violou o artigo 21 da Convenção Americana, em conexão com os artículos 1.1 e 2 do supracitado documento.

Entre as medidas de reparação dos prejuízos causados à Comunidade Mayagna Awas Tingni, a Corte determinou ao Estado a adoção em seu direito interno, em conformidade com o artigo 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para criar um mecanismo efetivo de delimitação, demarcação e titulação das propriedades das comunidades indígenas, de acordo com o direito consuetudinário, valores, usos e costumes destas.

Determinou, ainda, que o Estado deverá delimitar, demarcar e titular as terras que correspondem aos membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni e abster-se de realizar, enquanto não se efetue essa delimitação, demarcação e titulação, atos que possam afetar a existência, o valor, o uso ou o gozo dos bens

situados na zona geográfica onde os membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni habitam e realizam suas atividades.

Quanto aos danos materiais supostamente causados à Comunidade Awas Tingni, a Corte entendeu que não houve qualquer comprovação e concluiu que a sentença constitui, *per se*, uma forma de reparação para os membros da Comunidade Awas Tingni. Já no que diz respeito aos danos imateriais, a Corte decidiu que o Estado deve pagar, a título de reparação de dano moral, no prazo de 12 meses, a soma total de US\$ 50.000 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América) em obras ou serviços de interesse coletivo em benefício da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

Observa-se, no caso em questão, que a Corte protegeu o direito ao meio ambiente a partir do amparo ao direito à proteção judicial e ao direito à propriedade, tendo em vista que a sentença, estabelece a proibição de realização de qualquer ato, por parte do Estado, que possa afetar a existência, o valor, o uso ou o gozo dos bens – estando incluídos aí os recursos naturais – localizados na zona geográfica onde os membros da Comunidade Awas Tingni habitam e realizam suas atividades.

5. Conclusão

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é composto principalmente por documentos que asseguram os direitos civis, políticos, econômicos e culturais. No que tange às normas protetivas do meio ambiente no âmbito da Organização dos Estados Americanos, estas não se mostram específicas e suficientes para conferir efetividade à proteção ambiental, em razão de serem desprovidas de *status* normativo. Posto isto,

torna-se importante a análise sobre a proteção internacional do meio ambiente por via reflexa, já que a aplicação das normas de direito internacional nessa matéria ainda carecem de um movimento de conscientização dos Estados, justamente por não estabelecerem sanções para o seu descumprimento.

Esta pesquisa teve como objetivo verificar como é o tratamento dispensado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos aos casos nos quais os direitos humanos se relacionam com o direito ambiental, especificamente no que diz respeito às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão internacional responsável pelo julgamento dos casos contenciosos entre indivíduos e Estado. Para isso, foram analisadas o total de 286 jurisprudências da Corte, das quais quatro tratam da proteção ambiental pela via reflexa.

Percebe-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na apreciação dos casos que lhe são submetidos, tem inovado nas técnicas interpretativas com a finalidade de não deixar o meio ambiente desatendido. A partir de uma interpretação extensiva dos direitos humanos – especialmente dos direitos de comunidades indígenas e tribais – à propriedade, ao patrimônio cultural, à circulação e residência, à vida e à proteção judicial – a Corte tem fundamentado decisões que, por via oblíqua, protegem os bens ambientais, corroborando a tese da indivisibilidade, inter-relação e interdependência entre todos os direitos humanos, proclamada na Conferência de Teerã em 1968, reafirmada na Conferência Mundial de Viena de 1993 e reforçada por várias resoluções adotadas sob a égide da Organização dos Estados Americanos.

Há não apenas uma íntima relação entre ambiente e direitos humanos, mas esses interesses, muitas vezes, também se sobrepõem, na medida em que, em muitos casos, um é

pressuposto do outro. O meio ambiente se apresenta como ponto de convergência de interesses humanos e meio ambientais que apenas em seu conjunto são capazes de expressar a verdadeira complexidade das relações socioambientais. Assim sendo, os direitos humanos podem ser utilizados de forma a evitar, indiretamente, a degradação do meio ambiente.